y Libertad, Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolando Matus, que habían sido adiestrados, financiados y provistos de armas por la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea. Estos civiles fascistas hicieron el trabajo de fuerza de apoyo durante el golpe militar, bajo la denominación de «unidades independientes», las cuales recibían órdenes directas del Comando Central de la sublevación, cuyo jefe era el general Augusto Pinochet Ugarte.

Esta fuerza militar de cien mil hombres es la que sometió a mi país a una guerra relámpago el 11 de septiembre y, desde entonces, mantiene a su población civil bajo condiciones de ocupación militar de un ejército extranjero en tiempos de guerra.

Se podría pensar que no todas las unidades de las fuerzas armadas fueron cómplices en el golpe y masacre del pueblo chileno, pero los hechos mostraron que las disensiones internas fueron mínimas. Por ejemplo, en Santiago, sólo una parte pequeñísima de la oficialidad de la Escuela de Suboficiales, del regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto y de la Escuela de Carabineros se opuso al golpe, y esos oficiales fueron asesinados por sus propios compañeros. En general, ninguna unidad de las fuerzas armadas chilenas, considerada como tal, se opuso o se marginó del golpe. Eso demuestra que el trabajo previo de los conspiradores fue minucioso y preparó las condiciones de «opinión» para el momento de decidir el día en que se debía asesinar a Allende y masacrar al pueblo chileno.

«Alfa uno» se tambalea

Como veremos en detalle más adelante, la conspiración de los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y del cuerpo de policía militarizada (Carabineros), comenzó a estructurarse en el período octubre-noviembre de 1972, cuando los servicios de inteligencia del Pentágono norteamericano estimaron que «la capacidad de control de la Administración Allende sobre la potencialidad revolucionaria de los obreros y campesinos chilenos estaba en bancarrota».[2]

Desde esa fecha, el Latinamerican Desk del Pentágono, en combinación con más o menos un tercio de los generales del ejército, la mayoría de los generales de la fuerza aérea, la casi totalidad de los altos mandos de la marina y la mayoría de los generales de carabineros, comenzó a estructurar un dispositivo

golpista contra el régimen constitucional de Chile. Este dispositivo tenía dos etapas: una de «ablandamiento» de la opinión pública nacional a través de la acción de los partidos democratacristiano y nacional, de los grupos de choque fascistas como Patria y Libertad, Comandos de Ex Cadetes y Comandos Rolando Matus, y de las organizaciones empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril (oligarquía industrial), Sociedad Nacional de Agricultura (oligarquía agrícola) y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (oligarquía industrial, comercial y financiera). La segunda etapa era la de «caer sobre la presa», cuando se estimara que esa presa ya estaba acorralada, sin aliento y con precario apoyo de las masas.

En este esquema golpista, que tenía considerado un momento de «esperar y ver» según fueran los resultados de las elecciones generales para llenar los 150 cargos de diputados en la Cámara baja del Parlamento y 25 senadores (de un total de 50) en la Cámara alta, el día 4 de marzo de 1973, no estaba definido con claridad, todavía, el destino final de Salvador Allende una vez derrocado. Había, hasta julio de 1973, la idea mayoritaria en el seno de los altos mandos militares chilenos, de que Salvador Allende debía ser exiliado. Incluso, como veremos en este reportaje, había un sector minoritario de generales, sobre todo en el ejército (concretamente los generales de las divisiones primera y tercera, más el jefe conjunto de la segunda división y la guarnición de Santiago, entre los conspiradores; y el general Carlos Prats González, comandante en jefe del ejército, y el general Héctor Bravo Muñoz, comandante de la división de caballería del sur entre los no conspiradores), creían que podían convencer al propio Salvador Allende de encabezar un gobierno cívico-militar, de «unidad nacional», sin la participación oficial de los partidos políticos de izquierda en él. Esto lo llamaban ellos «un golpe blando».

Sin embargo, las cosas se precipitaron a partir de las elecciones de marzo de 1973, cuando la combinación de Gobierno sacó más del 40 % de los votos y la presión de las organizaciones de obreros, campesinos y empleados comenzó a crear de hecho, aunque en forma muy embrionaria, estructuras de poder desde la base. Ello suponía el intento de llegar a desbancar del poder económico, político y social al imperialismo norteamericano y a la oligarquía nacional. La actitud de los generales más reaccionarios, junto a la opinión del Latinamerican Desk del Pentágono, se endureció y presionó a los generales

que se aferraban a la idea de un «gobierno cívico-militar de unidad nacional» encabezado por Allende. Por otro lado, el propio Allende, empujado por la creciente marea revolucionaria de sus partidarios en la base, dejó en claro a los generales Prats y Pinochet que él no se prestaría para encabezar una dictadura militar encubierta.[3]

A medida que esto ocurría y la estructura militar golpista ya estaba completa en sus detalles estratégicos y tácticos, quedaba por definir con exactitud el destino personal de Salvador Allende; es decir, el objetivo militar final de la operación «alfa uno».

Fue el alto mando de la Marina chilena quien, en julio de 1973, rompió el equilibrio de opiniones, dando un golpe de fuerza audaz y macabro, en combinación con la organización Comando de Ex Cadetes, que era adiestrada por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana a través de un relaciones públicas de la empresa multinacional Ford Motor, el periodista chileno Federico Willoughbly MacDonald (actual Secretario de Prensa de la Junta Militar).

En ese mes, los almirantes golpistas recurrieron al asesinato político para avanzar en su trama y prevenir ser descubiertos antes de tiempo. Por medio de un equipo comando de asesinos profesionales, dirigidos por un miembro del Servicio de Inteligencia de la Marina, organizaron y llevaron a cabo el asesinato del edecán naval del Presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters, en la noche del 26 de julio de 1973, en su propia casa. El asesinato del marino fue hecho en combinación con el grupo de conspiradores de los Carabineros, que dominaban el Servicio de Inteligencia de ese cuerpo de policía militarizada.

Los altos mandos de la Marina que participaban en la conspiración contra el Gobierno de Allende, estimaron que con el asesinato del comandante Araya Peters, cumplían dos objetivos de alta significación:

1) Impedían que Araya Peters, hombre muy cercano al presidente Allende y partidario de la tesis «constitucionalista» de los sectores del Ejército y de Carabineros, fuera ascendido a contralmirante en noviembre-diciembre de 1973 y pasara a formar parte del Estado Mayor de la Armada Nacional. Esto debía ocurrir porque Araya Peters terminaba su período de dos años reglamentario como edecán naval del Presidente en septiembre de 1973, incorporándose de inmediato al servicio activo y,

también por reglamento, debía ser ascendido a la penúltima graduación más alta de su arma. Esto dejaba al presidente Allende con un hombre importante en el seno del Estado Mayor naval. Es decir, en el seno de la conspiración para derribar al gobierno constitucional, pudiendo descubrirla antes de tiempo. (Hay que tener claro que en julio de 1973 los generales conspiradores no habían fijado todavía fecha al golpe, y la idea común era que a fines de año o principios de 1974, cuando la situación económica fuera insostenible, acelerada por un nuevo paro empresarial nacional que se preparaba para comenzar desde agosto en adelante, sería posible dar con mayor facilidad el manotazo para derribar al Gobierno.)

2) Con la complicidad del Servicio de Inteligencia de Carabineros, los almirantes golpistas esperaban montar una trama para culpar al partido socialista de la muerte del edecán naval, y provocar así una reacción favorable a la conspiración en el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas y carabineros. Como se sabe, el partido socialista era el principal partido del Gobierno, a él pertenecía el propio Salvador Allende y de él dependía su guardia personal conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales).

El trabajo del comando asesino alquilado por el Servicio de Inteligencia de la Marina fue realmente «limpio» y la maquinaria funcionó bien cuando, horas después, el servicio de inteligencia de Carabineros «detuvo» al probable «asesino». Era un empleado de última categoría de una dependencia de la Corporación de Fomento de la Producción, borracho habitual, el cual, ¡vaya sorpresa!, después de ser flagelado en el primer sótano del Ministerio de Defensa, bajo la supervigilancia de Aldo Montagna, afirmó ser «socialista», haber participado en el comando asesino de Araya Peters por «contrato con un GAP» y estar «arrepentido», razón por la cual «se había entregado, ebrio, a la guardia nocturna de la Intendencia de Santiago, sede de la Primera Prefectura de Carabineros, la que dependía directamente, ¡adivinen de quién!, ¡del general César Mendoza Durán, actual miembro de la Junta Militar!

Sin embargo, al comenzar la segunda semana de agosto, la trama montada por el Servicio de Inteligencia de la Marina comenzó a desmoronarse. Y esto fue así porque un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios de la policía civil chilena —cuya director, Alfredo Joignat, era miembro del partido socialista—, comenzó a coger los hilos que llevaban a la identi-

dad de los integrantes del comando asesino. Pero todavía recibió Allende un primer informe policial sobre el caso, en el cual se establecían más allá de toda duda dos cosas:

1) El detenido por la Primera Prefectura de Carabineros como «presunto homicida» del comandante Araya Peters había sido obligado por el jefe del Servicio de Inteligencia de Carabineros a firmar, después de ser golpeado, una declaración que ni siquiera había leído. El texto de esa confesión del detenido «socialista», «amigo de los miembros del GAP» y «arrepentido» había sido conocido por un parlamentario de extrema derecha (Gustavo Alessandri)... ¡dos horas antes de ser detenido el «presunto homicida» y leída en parte por ese mismo parlamentario en la radioemisora Sociedad Nacional de Agricultura (propiedad de los latifundistas)!

2) La identificación de los verdaderos participantes en el comando asesino —siete personas— había revelado que al menos dos de ellos tenían conexiones con un alto oficial de la Armada Nacional. También la investigación realizada paralelamente sobre el capitán de carabineros del Servicio de Inteligencia que había hecho firmar la declaración al «presunto homicida», indicaba que se había reunido, dos semanas antes del 26 de julio, con otro alto oficial de la Armada Nacional.

Con estos antecedentes en sus manos, parte de los cuales Salvador Allende ordenó hacer públicos aunque sin mencionar la existencia del «alto oficial de la Armada Nacional», el Presidente se reunió en la mañana del 8 de agosto de 1973 con el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González; comandante en jefe de la fuerza aérea, general César Ruiz Danyau; comandante en jefe de la armada nacional, almirante Raúl Montero, y con el director general de carabineros, general José Sepúlveda Galindo.[4]

La situación política era gravísima: el 27 de julio había comenzado un nuevo paro nacional de los dueños de camiones, dirigidos por León Vilarín, hombre directamente conectado a la conspiración a través de Eduardo Frei y Onofre Jarpa (líderes de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, respectivamente). El 7 de agosto habían sido dadas por terminadas las conversaciones entre la directiva nacional del partido democratacristiano (dominada por el grupo de Eduardo Frei, el cual complotaba con los militares a través del general Oscar Bonilla, actual ministro del Interior de la Junta, y director de personal en aquella época). Estas conversaciones PDC-Allende habían si-

do pedidas por el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henriquez, bajo la línea general de «llegar a un acuerdo político de no agresión, a fin de detener la guerra civil que sería desencadenada después de un intento militar de golpe de estado». Naturalmente, Frei estaba interesado en que esas conversaciones fracasaran.

El mismo día 30 de julio, fecha de iniciación de las conversaciones, el general Oscar Bonilla se había reunido con Eduardo Frei y el senador Juan de Dios Carmona (ministro de Defensa en la administración de Frei), exigiéndoles que hicieran fracasar los intentos de conciliación política y que su dedicación fundamental debía ser «sacar un acuerdo del Parlamento que declare ilegal el Gobierno Allende». (Sobre este manejo que los generales golpistas hicieron de los partidos políticos de centro y derecha para sus fines, hablaremos con detalle más adelante, en el capítulo quinto).

Esa mañana del 8 de agosto era la de un día con nubarrones de tormenta para la estabilidad política de Chile: se había desencadenado un paro empresarial destinado a hacer naufragar la economía chilena; en respuesta, las organizaciones de trabajadores exigían a Allende que les permitiera «resolver con nuestras propias manos el paro empresarial»; mientras tanto la conjura industrial-militar-norteamericana empezaba la cuenta regresiva de una embestida final, calculada en medio año a partir de agosto-septiembre, que dejaría la situación «madura» para que los militares se hicieran cargo del poder total.

Sin embargo Salvador Allende no veía la situación global del mismo modo. Sus informaciones sobre la conjura militar, muy fragmentarias, y principalmente manipuladas por la contrainteligencia del Ejército y de Carabineros, le habían hecho formarse un cuadro errado de la magnitud de la conspiración. Él creía que había un pequeño «foco» en la Armada, dirigido por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso, principal puerto chileno a una hora y media de Santiago por carretera), vicealmirante José Toribio Merino —el cual, más tarde, llegaría a ser miembro de la Junta Militar—. y otro «pequeño foco» aislado, en la Fuerza Aérea, que tenía «las simpatías» del general César Ruiz Danyau. Razonando sobre estos datos, Allende, aquella mañana del 8 de agosto, pensó que podría tratar de resolver la crisis política global en que se encontraba, dando un golpe de efecto contra los conspiradores tanto civiles como militares, incorporando a TODAS las ramas

de las Fuerzas Armadas y Carabineros a su gabinete de ministros, y, por otro lado, desalentar los esfuerzos de las organizaciones de trabajadores por lanzar una embestida contra las fuerzas empresariales oligárquicas, mostrando una actitud de fuerza respaldada por los cuatro comandantes en jefe.

Para conseguir la participación militar en el Gabinete, esa mañana del 8 de agosto, Allende leyó a los cuatro jefes militares el informe de la policía civil sobre el asesinato del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, y les explicó que «si el pueblo se entera de esta verdad, Chile tendrá medio millón de muertos», porque los obreros y campesinos «se lanzarán contra los cuarteles de la Marina y de Carabineros para aplastar a los conjurados y asesinos de Araya Peters». Definió el informe como una bomba de tiempo. Y explicó que lo mejor era resolver el problema de la «conjura» de la Marina y de Carabineros «de modo confidencial e institucional». Agregó que el informe de la policía civil tenía una segunda parte, que él prefería no mostrar por ahora, en la cual se probaba la «conexión de los asesinos del comandante Araya Peters con fuerzas armadas extranjeras».

Por eso, explicó, lo mejor era, en ese momento, que «las instituciones armadas de Chile muestren cohesión y apego a la constitucionalidad y las leyes» integrando un Gabinete de «unidad nacional», para «apaciguar los ánimos», resolver el paro empresarial en sus inicios y no cuando ya fuera grave, «como el de octubre de 1972», y dar tiempo al poder ejecutivo para promulgar diversas leyes que pedían la Democracia Cristiana y el Partido Nacional por encargo de la Sociedad de Fomento Fabril y Sociedad Nacional de Agricultura.

Los comandantes en jefe aceptaron. El jefe de la Marina fue nombrado ministro de Hacienda; el de la Fuerza Aérea, de Obras Públicas; el del Ejército, de Defensa, y el de Carabineros, de Vivienda. En la mañana del 9 de agosto, Salvador Allende anunció dramáticamente al país la composición de su nuevo Gabinete, definiéndolo como de «seguridad nacional» y calificándolo de «la última oportunidad para evitar el enfrentamiento entre chilenos».

Pero, el fondo de la cuestión era que Allende había puesto la primera frase de su propia condena a muerte por parte de los conjurados. El general de aviación Ruiz Danyau comunicó a José Toribio Merino, almirante, los términos en que Allende leyó el informe sobre el asesinato del ex edecán naval Araya Peters, y

la idea que quedó entre los altos mandos conspiradores era que Allende estaba «peligrosamente cerca de la verdad», y que, si tenía tiempo para profundizar en la investigación, podría llegar a tener un cuadro completo de la conexión Pentágono-Marina-Fuerza Aérea-Ejército-Carabineros, del cual haría uso político en el exilio. Fue el propio Merino quien primero opinó en los días siguientes que «a este individuo hay que matarlo o suicidarlo, no nos queda otra».

No obstante, la decisión final de eliminar físicamente al presidente Allende no surgió hasta la noche del martes 21 de agosto, en una reunión en la que no participó el comandante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. (De hecho, Pinochet no supo nunca que Allende iba a ser asesinado. Se enteró de este plan en la tarde del 11 de septiembre, cuando la muerte del Presidente estaba consumada y se montaba afiebradamente el espectáculo del «suicidio».)

Sólo el entonces jefe de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; el general César Mendoza Durán, de Carabineros, y el general Gustavo Leigh Guzmán, nombrado el 20 de agosto comandante en jefe de la Fuerza Aérea, prepararon el plan para eliminar físicamente a Allende.

Y esa decisión final surgió como secuela de una torpeza mayúscula cometida por el general César Ruiz Danyau el viernes 17 de agosto. Impulsado por ambiciones personales, y creyendo que «la situación estaba madura», Ruiz Danyau preparó a la guarnición aérea de Santiago, compuesta de dos bases, una de apoyo terrestre y otra de caza y bombardeo, para un «pronunciamiento militar» el lunes 20 de agosto, que él creía que arrastraría al resto de las Fuerzas Armadas a su lado. Para desencadenar el golpe, Ruiz Danyau renunció a su cargo de ministro de Obras Públicas el viernes 17 de agosto. Esto significaba que Allende tendría que pedirle la renuncia como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y, planeaba Ruiz Danyau, esta institución militar debía resistirse, sublevarse y provocar la caída de Allende, así como su nombramiento como jefe de una Junta Militar de Gobierno.

Allende, conociendo en parte el juego de Ruiz Danyau, demoró su aceptación de la renuncia hasta el día siguiente, sábado 18 de agosto. Mandó llamar a reunión en el Palacio de la Moneda al jefe de la Marina, almirante Raul Montero; al jefe del Ejército, Carlos Prats, y al segundo general más antiguo de la Fuerza

Aérea, Gustavo Leigh Guzmán (éste era uno de los jefes de la conspiración, pero Allende no lo sabía). En la reunión, Allende les hizo escuchar una grabación en cinta magnetofónica de una conversación en que participaban un coronel retirado de aviación y dos o tres personajes más. En la grabación se oía decir al coronel retirado que «el grupo» ya había comenzado a «operar diversas unidades» para convencer a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas «para que abandonen a Allende» y se «sumen a la cruzada de lucha contra el marxismo». Agregaba que «los americanos están en conocimiento de nuestra acción y la aprueban», y citaba una sola vez, que «mi general Ruiz Danyau está a muerte con nosotros».

Allende dijo entonces a Gustavo Leigh Guzmán que se debía entender que «en este complot» hay «traición a la patria», hay una potencia extranjera en complicidad con generales «de la República de Chile». «Esto es un baldón moral para nuestras fuerzas armadas.» Acto seguido señaló a Leigh Guzmán que él debía aceptar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, aprobar el llamado a retiro de Ruiz Danyau y convencer a las unidades aéreas que pudieran apoyar a Ruiz que no hicieran semejante cosa. Leigh Guzmán, probablemente muy sorprendido por el texto de la grabación que había escuchado, aceptó la proposición del presidente Allende, el cual amenazaba con «dar a conocer a Chile esta infamia».[5]

Al día siguiente, sin informar a Ruiz Danyau de nada, Leigh Guzmán habló con José Toribio Merino, de la Marina; César Mendoza, de Carabineros, y Augusto Pinochet, del Ejército. Les indicó, según parece por los sucesos posteriores, que había que desembarcar a Ruiz Danyau, no apoyar la insurrección de la guarnición aérea de Santiago y esperar el momento preciso para dar el golpe.

Así ocurrió. Al día siguiente, lunes 20 de agosto, la oficialidad de las bases aéreas El Bosque y Los Cerrillos, de Santiago, se autoacuarteló, solicitando apoyo a la Marina de Guerra y a los regimientos Tacna y Buin, así como a la Escuela de Suboficiales y Regimiento Blindado Número 2, ambos acantonados en la ciudad. El día, en todo caso, estaba bien elegido. Salvador Allende viajó en helicóptero a Chillán (unos 500 kilómetros al sur de Santiago) para asistir a la ceremonia de conmemoración del natalicio del padre de la patria, el general Bernardo O'Higgins. Sin embargo, el resto de los generales conspiradores habían decidido hacer abortar este golpe «a destiem-

po» y dejar caer la guillotina sobre el cuello de su cómplice César Ruiz Danyau.

Desde el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que reúne a las tres ramas militares, tomó las medidas de parlamento y convencimiento para los oficiales aéreos autoacuartelados y ya al mediodía estaban todos de acuerdo en que había que «esperar» y que mientras tanto, el general César Ruiz Danyau sería llamado a retiro, el general Gustavo Leigh Guzmán asumía la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y, por último, en el ministerio de Obras Públicas se nombraba a otro general de aviación, Héctor Magliochetti (el cual es ahora ayudante del general Pinochet).

Todo aparentaba ser una rotunda victoria política de Salvador Allende. Joan Garcés, ciudadano español y asesor económico de Allende, en su testimonio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de octubre de 1973, indicaba: «Esa noche, a su regreso a Santiago, el presidente Allende es informado de que el general Pinochet, comandante en jefe subrogante del Ejército, fue requerido para que se sumara al golpe y, según él mismo, respondió: "Soy un general respetuoso de la Constitución y seré leal al Gobierno hasta las últimas consecuencias."»

Resulta notable el hecho de que hasta la mañana del 11 de septiembre, cuando el general Pinochet dirigía desde los faldeos cordilleranos de Peñalolén, en Santiago, la invasión militar a la ciudad y el ataque y destrucción de La Moneda, todavía Salvador Allende pensaba en él como «un general leal» y lo llamaba por teléfono para preguntarle: «¿Qué está pasando, Augusto?»

La «victoria» sobre el pequeño *putsch* Ruiz Danyau del lunes 20 de agosto, fue una a lo Pirro para Salvador Allende. La había logrado a costa de dejar saber a sus enemigos que tenía informaciones concretas de la complicidad de generales chilenos con generales norteamericanos para tramar el golpe de Estado. Fue la segunda y definitiva frase que el propio Allende escribió en su sentencia de muerte dictada por los líderes de la conspiración. A lo de Araya Peters, se sumaba ahora lo de Ruiz Danyau.

Desde el mismo martes 21 de agosto, los autores intelectuales del asesinato —Leigh, Mendoza y Merino—, comenzaron a elaborarlo, asesorados por un equipo sacado del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército, del Servicio de Inteligencia de la Armada, y del Servicio de Inteligencia del Ejército

de los Estados Unidos. Quedó definitivamente aceptado por estos tres generales que el exilio de Allende, teniendo esos documentos a su alcance y considerando las simpatías que despertaba en la mayoría de los gobiernos y pueblos del mundo, era un enemigo más que formidable para la dictadura militar que sería implantada. Por eso, el objetivo del plan «alfa uno» quedó estructurado cabalmente para ser puesto en práctica durante el día D.

En términos de reconstrucción aproximada (dadas las dificultades de reportar después del día 11 de septiembre para el autor de este libro, ya que pasó 15 días esquivando las fuerzas militares que lo buscaban, y enseguida estuvo confinado 120 días en una embajada en Santiago, a causa de que la Junta Militar se negaba sistemáticamente a otorgarle salvoconducto para que pudiera salir del país), el objetivo final del plan «alfa uno» estaba contenido en unas ideas que recogí de tercera o cuarta mano después que, consumado el asesinato de Allende, algunos altos mandos militares que estaban en el aparato de acción de «alfa uno», se confidenciaron con mandos inferiores, e incluso civiles, abrumados por la barbaridad que habían planificado, puesto en acción y ejecutado el 11 de septiembre.

Para completar las «ideas básicas» del plan, los autores de «alfa uno» recogieron apresuradamente información sobre la personalidad de Salvador Allende entre los mandos militares que más lo conocían. Principalmente, se valieron de la opinión del general de división Manuel Torres de la Cruz, comandante en jefe de la Quinta División de Ejército en el extremo sur del país, hombre sumamente católico, miembro de la organización internacional Opus Dei y cuarta antigüedad en el generalato del ejército (sobrepasado sólo por Carlos Prats, Augusto Pinochet y Orlando Urbina Herrera; comandante en jefe titular, comandante en jefe subrogante e inspector general del Ejército, respectivamente).

El general Manuel Torres de la Cruz era el jefe de la fracción ultrafascista del Ejército, verdadero motor de la conspiración contra el Gobierno constitucional chileno desde octubre de 1972, y, sin embargo, estaba considerado por Salvador Allende y su «asesor en asuntos militares», el senador Alberto Jerez, de la Izquierda Cristiana, como «el único general allendista del ejército» y un «leal amigo».[6]

Los informes confidenciales del general Torres de la Cruz sobre la personalidad de Allende dibujaron, para los promotores

de «alfa uno», la caricatura de un «individuo exageradamente bebedor, voluble, vanidoso, cobarde, fácil presa del desánimo en los momentos difíciles». Esta caricatura era como calcada de la publicitaria en los periódicos de derecha de Santiago («El Mercurio» y su cadena —del clan monopólico Edwards—; «La Tribuna», del Partido Nacional; y «La Prensa», del grupo de la Democracia Cristiana controlada por Eduardo Frei), en el curso de su violenta campaña por desacreditar la persona del Presidente constitucional, iniciada apenas cuatro o cinco meses después de comenzar su período presidencial el 4 de noviembre de 1970.

Considerando este informe del general Manuel Torres de la Cruz, además de otros del general de Carabineros José María Sepúlveda Galindo y del edecán del Ejército, los promotores del plan «alfa uno», asesorados por el grupo de Inteligencia de la misión militar norteamericana en el Ministerio de Defensa de Chile estimaron que, una vez atrapado Allende en su residencia particular de la calle Tomás Moro, en la parte oriental de la capital, o en el Palacio de la Moneda, para el día del desencadenamiento del golpe militar, sólo podrían ocurrir dos alternativas. En el lenguaje de los conspiradores, las alternativas eran así:

«Probabilidad Uno: El objetivo, acorralado ante el despliegue blindado y de infantería, y bajo la amenaza de bombardeo aéreo, se suicida antes de que comience el combate. Esto es altamente posible, teniendo en cuenta que el objetivo ha expresado en innumerables ocasiones, incluso ante los altos jefes de la Institución, que es un admirador de José Manuel Balmaceda, presidente que se suicidó en 1891, después de la derrota de sus tropas sufrida a manos de las tropas insurgentes.

»Probabilidad Dos: El objetivo, sabiendo que no tiene defensa alguna, ya que él sabe perfectamente que los civiles están incapacitados para defenderse de un ataque coordinado de todas las instituciones armadas del país, se rinde. Esto puede ocurrir antes o después de un bombardeo aéreo de ablandamiento y no de demolición, a su casa particular o al Palacio. El bombardeo de ablandamiento tendrá el carácter de recurso para obtener Uno u obtener Dos, demostrando que la decisión institucional es inflexible y que destruiremos todo intento de oposición a nuestros objetivos mayores.

»Si ocurre la Uno, entonces se debe encargar a prensa militar que haga el anuncio de inmediato, comenzando paralela-

mente la fase prensa de descrédito al objetivo suicida centrando la operación en proponer una imagen de borracho, licencioso y sibarita (esto se conecta con el equipo encargado de componer pruebas).

»Si se da la Dos, se separa al objetivo de inmediato de todos los demás civiles y militares que puedan estar con él. Estos deben ser enviados a seguridad de Escuela Militar, bajo arresto en tiempo de guerra. El objetivo, una vez aislado, debe ser llevado en seguridad máxima a Blindados 2. Se le debe tratar en forma humillante por personal escogido con uniforme de baja graduación. Se le somete a vejámenes (desnudo, actitudes vejatorias, obligarlo a ejecutar actos humillantes, los cuales se fotografiarán de manera abierta para que el objetivo sepa, según experiencias que nos han comunicado, para inducirlo a suicidio por efecto traumatizante. Se debe agregar a la preparación el mostrar al objetivo el material preparado previamente para desacreditarlo públicamente. Si la inducción tiene éxito, prensa militar debe comenzar de inmediato la operación «conocimiento público» en los términos ya citados. Si el objetivo resiste la acción del equipo para efecto traumatizante, y no se consigue resultado alguno cuando hayan transcurrido entre 60 y 90 minutos después de la rendición, el objetivo será inmovilizado y muerto con características de suicidio. A esto seguirá la operación prensa militar como estaba prevista. En ambos procedimientos se informará que el objetivo fue tratado en forma respetuosa a su rango por los vencedores. Que, por eso, sus ropas no se sometieron a registro cuando se le dejó solo en el recinto de oficiales del regimiento, y esto posibilitó que el objetivo guardara una pistola calibre 7.65 entre sus ropas. Con ella, el objetivo se suicidó mientras estaba solo en la dependencia, esperando la llegada de los comandantes en jefe para que firmara su renuncia, según él mismo había aceptado, y dijera unas palabras al pueblo para que no resistiera en ningún momento a la acción de las instituciones militares. El objetivo había aceptado también, salir en un avión, con destino a Cuba, puesto a su disposición por la FACH.»

De acuerdo con informaciones posteriores, muy fragmentarias, los conspiradores de «alfa uno» no consideraron jamás la posibilidad de que Salvador Allende resistiera hasta el final el asalto abrumador de blindados, infantería y aviación, a los cuales se agregaría más tarde, pasadas las 13 horas, una escuadra de carabineros del Grupo de Servicios Especiales, que cu-

brió el segundo piso de La Moneda con bombas de gases lacrimógenos y vomitivos. En todo caso, la reconstrucción del objetivo final de «alfa uno» que ustedes han leído, refleja el grado de decisión homicida con el cual los altos mandos militares afrontaron la tarea de derrocar al Presidente constitucional de Chile, después que éste les mostrara los documentos que poseía y que llevaban a una segura pista para demostrar que el Servicio de Inteligencia de la Marina había organizado el asesinato del edecán naval, comandante Arturo Araya Peters, el 26 de julio; y, además, que el ex general César Ruiz Danyau estaba conspirando con asesores de la misión aérea norteamericana.

El día 11 de septiembre, pocos minutos después de las dos de la tarde, toda la operación «alfa uno» se tambaleó, cuando la patrulla de penetración de la Escuela de Infantería subió al segundo piso de La Moneda y asesinó al presidente Allende «fuera de programa». Y mucho más se complicó «alfa uno» debido a que los defensores civiles del Palacio de Gobierno, al ver caer acribillado a Allende, reaccionaron con furia y rechazaron la penetración de la infantería, manteniéndose en un combate de inútil resistencia 40 o 50 minutos más.

Cuando cerca de las tres de la tarde del 11 de septiembre, el general Javier Palacios Ruhman, comunicó al jefe militar de la insurrección, general Augusto Pinochet Ugarte, que toda la resistencia en La Moneda había cesado, éste conocía de la muerte de Allende desde hacía menos de 30 minutos. Un jeep militar, con una estafeta con «información clasificada» (el lenguaje yanqui del ejército chileno para decir «información secreta»), había partido desde las inmediaciones de La Moneda, por órdenes del general Palacios, hasta el cuartel general de Peñalolén para informar personalmente, y no a través de los equipos de telecomunicaciones, a Pinochet que Allende había sido liquidado a tiros de fusil ametrallador FAL. El jeep llegó a Peñalolén alrededor de las dos y media de la tarde. Desde ese momento, hasta cerca de las tres, Pinochet y su Estado Mayor discutieron qué hacer. Todos estuvieron de acuerdo en que el asesinato de Allende era un tremendo error porque haría más encarnizada la resistencia de los trabajadores; por lo tanto, a cualquier costo, debía probarse que se había suicidado.

Como en esos instantes La Moneda todavía resistía, Pinochet y su Estado Mayor decidieron postergar la discusión de los detalles para fabricar el suicidio hasta el momento de tener en sus manos el cadáver del Presidente constitucional, pero, igual-

mente, decidieron dar una «información oficiosa», para el extranjero, de que Allende se había suicidado. Para ello recurrieron al sistema de telecomunicaciones abierto, sin clave, que habían estado utilizando todo el día, sabiendo perfectamente que radioaficionados chilenos y de Argentina, además de receptores de las agencias norteamericanas de noticias en Santiago, tenían sintonizadas sus bandas de transmisión. Alrededor de 20 minutos antes de las tres de la tarde, desde Peñalolén, se transmitió en sistema morse, al puesto numero cinco, en el Ministerio de Defensa, a ciento cincuenta metros del asediado Palacio de la Moneda, una instrucción de Pinochet para que ese puesto, de viva voz, diera la noticia encubierta como información interna entre los distintos puestos de comando de la insurrección militar. El puesto número cinco al mando del vicealmirante Patricio Carvajal Prado, hombre de confianza del almirante José Toribio Merino, y el cual, presumiblemente estaba también en conocimiento del verdadero alcance de «alfa uno», en ese instante a punto de fracasar, cumplió la orden a las 14.45 horas. Un radioaficionado de izquierdas que estaba escuchando los mensajes militares, pudo grabar esa comunicación y por eso, yo puedo transcribirla textualmente. Decía así:

«Atención... éste es el puesto cinco... el puesto de Patricio... se informa que personal de la Escuela de Infantería está ya dentro de la Moneda... lo que sigue lo voy a transmitir en inglés, por si nos están escuchando... they said presidente Allende committed suicide... ¿me entendió?

La frase en inglés, desde el punto de vista de la seguridad para el mensaje, era ridícula, porque este idioma se enseña en Chile desde la escuela básica. Sin embargo, no era tan ridícula si, como el vicealmirante Carvajal sabía, los corresponsales norteamericanos estaban escuchando en sus monitores de Santiago y de Mendoza, en Argentina. Eso les facilitaba la rápida y exacta comprensión, y lo que los militares insurrectos querían era que todos los teletipos del mundo, a partir de esa hora, prepararan a la opinión pública mundial para la idea del «suicidio de Allende».

Pero ésta fue la parte fácil de la trama montada por los generales insurrectos. La difícil comenzó apenas quince minutos después, cuando Pinochet, ansioso, le preguntó al general Palacios: «¿Cómo está el cadáver?», y éste le contestó: «Destrozado». Pinochet dio orden de aislar el sitio y de que nadie viera el cuerpo ametrallado de Allende.

Durante media hora se buscó una forma adecuada de suicidio para un cadáver ametrallado. Se acordó destrozarle la cabeza con balas de subametralladora, vestirlo de nuevo para impedir que los testigos posibles vieran las otras heridas en el cuerpo, y poner el cadáver en otro sitio más adecuado, ya que el Salón Rojo, lugar original del asesinato, estaba destruido y en llamas, al igual que el despacho de trabajo del Presidente. Se eligió el Salón Independencia, un lugar de descanso y recepción de visitas privado del Presidente. Allí, los hombres del Servicio de Inteligencia del Ejército, vigilados por el general Javier Palacios Ruhman, sacaron del cadáver el ensangrentado suéter de cuello subido que había utilizado durante todo el asedio. También le sacaron los pantalones color azul, que estaban perforados y ensangrentados a la altura del vientre. Le pusieron pantalones de color marengo, sacados de uno de los tantos cadáveres que había dentro de La Moneda, y un suéter gris de cuello subido. En seguida, para mayor seguridad, le colocaron una chaqueta de tweed color gris, abotonada en el botón inferior, que el Presidente se había sacado en el combate, dejándola sobre su mesa de trabajo. Vestido así, los militares del SIM lo sentaron en el sofá de terciopelo rojo que estaba adosado a la pared que da para la calle Morandé, lo apretaron contra el respaldo, pusieron la subametralladora que tenía en sus manos Allende cuando fue asesinado casi una hora y media antes, y lo acribillaron. La cabeza de Allende se partió en dos, y parte de su masa encefálica, sangre y trozos de cabello golpearon y se pegaron en un gobelino que estaba en el muro adyacente al sofá, a una altura superior a los tres metros. El escenario estaba completo. Como el cadáver de Allende tenía un *rigor mortis* de poco más de una hora, no fue fácil colocarlo en el sillón, y los militares del Servicio de Inteligencia del Ejército tuvieron que enderezar con fuerza las piernas del ex Presidente, dejándolas muy separadas, para que estabilizaran el cuerpo. Los brazos quedaron colgando a los costados del cuerpo, ligeramente extendidos.

Eran las tres y media de la tarde. En ese instante, más de tres horas después de comenzado el incendio de La Moneda originado por la explosición de los cohetes de los aviones Hawker Hunter, los bomberos de la Quinta Compañía (que tenían preparados sus carros contra incendios desde las 12.20 horas, cuando terminó el bombardeo aéreo y vieron las llamas sobre el edificio gubernativo) recibieron órdenes de salir a combatir el

fuego. El cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos está a menos de trescientos metros de La Moneda, en calle Nataniel, en la planta baja del mismo edificio que ocupan las oficinas de la agencia norteamericana de noticias United Press International.

Jaime Egaña, capitán de la compañía de bomberos relata que «un momento que no se nos olvidará fue la salida del carro bomba desde el cuartel; se abrieron las puertas y los soldados se apostaron en diversos sitios. Al salir, los militares dispararon simultáneamente contra todos los sitios para defender nuestro avance».

Al llegar a La Moneda, lo bomberos vieron que el incendio cubría casi todo el sector de calle Morandé, en los pisos segundo y tercero, y toda la fachada norte, en que estaban el Ministerio del Interior y la Presidencia.

La orden de intervención para los bomberos había sido dada desde el Ministerio de Defensa, después que el general Palacios informara que estaba todo listo en el salón privado de la Presidencia. Es decir, que el espectáculo estaba montado para esparcir por el mundo la teoría de que Allende se había suicidado. Sin embargo, el general Palacios, presionado por el incendio que amenazaba con llegar al lugar donde se preparaba la trama, actuó con demasiada prisa al informar al Ministerio de Defensa que «todo O.K.». Y eso porque cuando los bomberos comenzaron a combatir el fuego, por lo menos dos entraron al Salón Independencia, y fueron empujados hacia el exterior por los fusiles ametralladoras de los que estaban en el interior. Pero alcanzaron a ver a uno de los militares, que ponía un arma en las rodillas del cadáver sentado en el sofá, mientras otro ponía a su lado el casco de combate y los anteojos del presidente Allende. Sólo después de eso, se les informó a todos los bomberos que ahí no se podía entrar, porque «el presidente Allende se suicidó y no se puede mover nada».

Al mismo tiempo que esto ocurría, los miembros del SIM estaban empeñados en otra tarea importante: la de fabricar un testigo caído del cielo. Ocurrió que cuando las fuerzas de infantería entraron por segunda vez al segundo piso de La Moneda, desmoronada ya la resistencia civil, actuaron con una brutalidad sin límites, golpeando, pateando y dando de culatazos a los rendidos, obligándolos a tenderse en el suelo, de bruces, con las manos sobre la nuca, y corriendo sobre ellos con las pesadas botas de combate al atravesar los pasillos. Uno de los úl-

timos en ser rodeados por los soldados asaltantes fue un civil que llevaba un maletín en la mano, que estaba acurrucado contra un muro y sollozaba, histérico, gritando «yo no he hecho nada... yo no he hecho nada». Uno de los miembros del equipo del SIM que iba a la cabeza, junto con el general Palacios, para comenzar el trabajo de «montar el suicidio» de Allende, se quedó con el histérico prisionero, mientras a pocos metros, en el Salón Independencia, se discutía la forma de simular el suicidio. Ahí surgió la idea. El civil fue llevado al Salón, y los miembros del SIM le dijeron: «Tú eres del GAP y asesinaste al Presidente... Te fusilaremos en el acto».

Ese hombre era el doctor Patricio Guijón Klein, que desde noviembre de 1972 había sido contratado como médico cirujano en el equipo de doctores para cuidar la salud del presidente. No pertenecía a ningún partido político integrante de la Unidad Popular. Había aceptado ser médico de Allende simplemente porque eso mejoraba su *statu* como profesional. Esa tarde del 11 de septiembre se había visto entrampado junto con el equipo médico restante (siete personas), y el futuro le deparaba ser «testigo» de un suicidio que no ocurrió... Era su vida contra su participación en la trama montada por los militares insurrectos. Prefirió ser testigo.

Con Palacios y los miembros del SIM, entre las tres y cuatro de la tarde, el doctor Guijón se aprendió el esquema general de lo que tenía que decir. Fueron testigos de este acuerdo las decenas de cadáveres de soldados que había en el interior de La Moneda, y los nueve cadáveres de los civiles que cayeron defendiendo la sede de los presidentes constitucionales de Chile. Mientras combatían el fuego, los bomberos fueron advertidos que todos quedaban bajo «jurisdicción militar» y no «pueden decir a nadie lo que han visto dentro de este recinto». La eficacia de la maquinaria militar para fusilar, detener, torturar y hacer desaparecer personas por miles, demostrada en los días posteriores, reafirmó en el ánimo de los bomberos de la Quinta Compañía el deseo de cumplir con las órdenes militares recibidas el 11 de septiembre, entre las tres y media de la tarde y las diez de la noche, cuando se retiraron del recinto, después de sofocar el incendio.

A esa hora, el cadáver del presidente Allende ya estaba en el Hospital Militar, para ser puesto dentro de un ataúd, y para servir de testigo a una junta de médicos del Ejército, la Fuerza Aérea, Marina y Carabineros, que no harían más que copiar en

un «acta» lo puesto horas antes por los detectives de la Brigada de Homicidios, llamados por el general Ernesto Baeza Michelsen, comandante de las fuerzas militares que habían invadido el centro de Santiago a partir de las seis de la mañana de ese día.

Los detectives de la Brigada de Homicidios fueron llamados a las cuatro de la tarde por el general Baeza Michelsen. A esa misma hora, desde el comando conjunto central, en Peñalolén, Pinochet, por intermedio del general Oscar Bonilla, el cual sabía del plan primitivo que se frustró, daba órdenes distintas, que no fueron obedecidas. En la grabación de un radioaficionado, esta orden se transmitió así:

«Aquí general Bonilla... General Bonilla a contralmirante Carvajal. Una orden de Pinochet... General Bonilla de parte de comandante en jefe: es indispensable que a la mayor brevedad posible los médicos jefes del Servicio de Sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende... con el objeto de que más adelante no se nos pueda imputar por los políticos a las Fuerzas Armadas que fuimos los que provocamos su fallecimiento... esto debe ser a la brevedad... diga si me ha entendido...

»Conforme... repito: los jefes de Sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y también Carabineros, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende... con el objeto...

»Sí... los jefes del Servicio de Sanidad de cada institución y además de Carabineros... roger...»

La descoordinación entre los jefes militares, atropellándose entre sí para intentar sepultar a los ojos de los chilenos y de los demás pueblos del mundo el asesinato de Allende, era muy grande esa tarde del 11 de septiembre. Razonando con frialdad, el jefe de las fuerzas que asaltaron el centro de Santiago, general de brigada Ernesto Baeza Michelsen, en contacto con su superior inmediato, el jefe de las fuerzas que ocuparon toda la provincia de Santiago, general de brigada Sergio Arellano Stark, parece haber llegado a la conclusión que después de la acción militar de *blitzkrieg* en que estaban siendo fusilados y asesinados miles de civiles en todo el país, la «palabra militar» iba a estar muy desprestigiada en la opinión pública chilena. Por eso, decidió que la «certificación» del «suicidio» debía estar avalada por la policía civil, y con ese objeto llamó a la Moneda al equi-

po de la Brigada de Homicidios, desobedeciendo las órdenes del propio general Pinochet, que exigía la presencia de los médicos militares. Baeza Michelsen, en diez minutos, ordenó al aquipo de la Brigada de Homicidios lo que tenía que hacer:

1. Levantar un acta del «sitio del suceso» tal como lo iban a encontrar cuando entraran al Salón Independencia de La Moneda. Es decir, debían levantar un acta del escenario tal como lo preparó entre las tres y tres y media de la tarde el equipo del Servicio de Inteligencia Militar, vigilado por el general de brigada Javier Palacios Ruhman.

2. Examinar la herida de «tipo suicida» que el cadáver de Allende tenía en la cabeza... Y NADA MÁS...

3. No realizar una investigación circunstancial del sitio del suceso.

Los miembros de la Brigada de Homicidios, encabezados por el inspector Pedro Espinoza Valdés, cuyas ideas políticas eran notoriamente contrarias al destruido régimen de la Unidad Popular, comenzaron su «trabajo» a las 16.20 horas del día martes 11 de septiembre y lo terminaron a las 18.10 horas.

Una hora después que este trabajo había concluido el general Pinochet, por intermedio del general Óscar Bonilla, seguía insistiendo en la presencia de los médicos militares y, desesperado, preguntaba por qué no llegaba todavía al comando central de las tropas de ocupación de la capital el «acta del suicidio».

A las siete de la tarde, un radioaficionado captó y grabó esta conversación por el equipo de telecomunicación de los militares, entre el general Bonilla y el general de aviación Nicanor Díaz Estrada, que estaba a cargo del puesto de coordinación, en el Ministerio de Defensa Nacional:

«Nicanor... escucha... queremos saber si ya los jefes del Servicio de Sanidad y el médico legista hicieron el reconocimiento y el acta correspondiente... esto es muy importante... NO LO VAYAN A LLEVAR A LA MORGUE PARA QUE LE HAGAN LA AUTOPSIA PORQUE ÉSE ES UN ANTRO DE EXTREMISTAS Y PUEDEN TRATAR DE ROBARSE EL CUERPO...

»Comprendido... dimos orden de traslado EN SECRETO al Hospital Militar... los jefes legistas fueron citados en el Hospital Militar. Di orden de que el acta deben traerla aquí, al Estado Mayor. Pero no la han traído... DE ESTO HACE UNA HORA Y MEDIA... pero no tenemos noticias...

»Sí, Nicanor... Dile a Herman Brady que garantice la abso-

luta seguridad militar del Hospital Militar... Esto es importante... Adelante. Cambio, Nicanor...

»Lo hice así.

»Gracias, Nicanor.»

Está claro que los generales al mando de las tropas de invasión de Santiago estaban muy preocupados por mantener fuera de la vista de todas las personas ajenas a sus instituciones el cadáver del asesinado presidente. Y su preocupación fue tan celosa que, al día siguiente, no le permitieron a su viuda, Hortensia Bussi, que mirara por última vez el cuerpo de su marido.

La viuda de Allende, el día 13 de septiembre, en Santiago, en la embajada de México, relató al periodista mexicano Manuel Mejido, del «Excelsior», la forma en que los militares le impidieron ver el cadáver: «Al otro día (miércoles 12 de septiembre) me avisaron por teléfono que Salvador se encontraba en el Hospital Militar y que estaba herido. Me dirigí allá y aunque me identifiqué plenamente, los soldados me negaron la entrada. Después hablé con un general que me recibió con estas palabras: "Señora, fui amigo de Salvador Allende. Le expreso mi más sentido pésame". Entonces supe que había muerto.

»Me prometió ese general, cuyo nombre no conozco, un jeep y un oficial para que me acompañara al campo aéreo del Grupo Siete de las Fuerzas Aéreas de Chile, donde me dijeron que tenía que dirigirme. Pero después salió otro general que tampoco conozco, y simplemente me dijo que viajara en mi auto, porque no había disponibles ni vehículos ni soldados.

»Decidí viajar en el pequeño automóvil de mi sobrino Eduardo Grove Allende. En el campo aéreo me dijeron que el cadáver de Salvador estaba a bordo de un avión de la Fuerza Aérea. Antes de abordarlo hablé por teléfono con mi hija Isabel, pero no pudo acompañarme porque le faltaba su salvoconducto.

»Subí al avión. Imagínese el cuadro que vi: Un ataúd en el centro, cubierto con una cobija militar, y a los lados, Patricio López, mi otro sobrino, y Laura Allende, la hermana de Salvador. Me acompañaron también el edecán Roberto Sánchez y Eduardo Grove. Volamos hacia Viña del Mar. El avión descendió en la base aérea de Quintero. El vuelo fue sin tropiezos, suave. Después bajaron a Salvador.

»Pedí verlo, tocarlo, pero no me lo permitieron... Me dijeron que la caja estaba soldada. En dos automóviles, siguiendo al furgón, fuimos hasta el cementerio de Santa Inés. La gente nos miraba extrañada. No sabía de quién se trataba, ni de quién era

el cadáver que iba en el furgón. Había gran cantidad de soldados y de carabineros, como si se esperase una multitud. Las cinco personas que acompañábamos a Salvador caminamos en silencio hasta la cripta familiar, donde enterramos hace un mes a Inés Allende, la hermana de Salvador, que había muerto de cáncer.

»Volví a insistir en ver a mi marido. No me lo permitieron, pero levantaron la tapa y sólo descubrí una sábana que lo cubría. No supe si eran los pies o la cabeza. Me dieron ganas de llorar. Los oficiales me impidieron que lo viera. Volvieron a repetirme que el ataúd se encontraba soldado. Entonces dije al oficial que me acompañaba, en voz alta: "Salvador Allende no puede ser enterrado en forma tan anómina. Quiero que ustedes sepan por lo menos el nombre de la persona que están enterrando." Tomé unas flores cercanas y las arrojé a la fosa y dije: "Aquí descansa Salvador Allende, que es el Presidente de la República y a quien no han permitido que ni su familia lo acompañe".»

Las contradicciones

La preparación del escenario en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno de Chile fue tan precipitada, debido a que no se pudo poner en práctica la operación final de «alfa uno» para suicidar a Allende en el interior del Regimiento Blindados Número 2 que los diferentes personajes que intervinieron en la trama cometieron errores burdos. Errores que podrían servir para que cualquier detective de tercera categoría de la policía civil de Santiago investigara y desentrañara el crimen. Pero, la policía civil de Santiago no está interesada en descubrir a los homicidias del presidente Allende. El actual Director de Investigaciones es el mismo general que dio las órdenes de «no investigar» a los técnicos de la Brigada de Homicidios que concurrieron a La Moneda a examinar SOLAMENTE la herida de tipo suicida que Allende tenía en la cabeza, después que le fue destruida con su propia metralleta por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. El mismo día 11 de septiembre, en la tarde, el general Ernesto Baeza Michelsen fue nombrado Director de Investigaciones, es decir, jefe máximo del inspector Pedro Espinoza y el resto de policías civiles que concurrieron a La Moneda. Por eso, ningún detective chileno se dedicaría a